

FRAGMENTOS

¿Quiénes son y cómo operan los clanes políticos?

Los clanes políticos son grupos de poder regionales con nexos familiares y/o afinidades políticas, económicas y sociales. Hunden sus raíces en los doscientos años de vida republicana. Pero se fortalecieron en el Frente Nacional como una reacción defensiva de las regiones ante los acuerdos de los líderes nacionales de los partidos Liberal y Conservador para repartirse el poder central. Al principio, su fundamento esencial era el clientelismo. Luego, con el auge del narcotráfico y de otras economías subterráneas, algunos de estos clanes se asociaron también con grupos al margen de la ley para buscar beneficios en estas nuevas rentas. Se perfilaron como actores de primer orden en la política departamental y municipal, por encima de los partidos políticos, simples vehículos de sus aspiraciones.

“La relación entre las élites nacionales y los clanes regionales es simbiótica: aquellas necesitan de estos para hacerse elegir a los puestos de representación nacional, y estos requieren de aquellas para la apropiación de recursos a nivel nacional. Con los puestos del nivel local y los recursos nacionales, los clanes alimentan su aparato político y aseguran un caudal de votos que, en elección tras elección, es decisiva en la competencia política. Esto lleva, entre otros factores, a que los mismos clanes y familias se perpetúen en el poder amasando capitales políticos y enormes fortunas”.

“En este marco, las elecciones locales son determinantes en el balance relativo de poder en el ámbito regional y nacional. En lo local, para los clanes políticos el principal factor de poder es el presupuesto controlado a través de los cargos alcanzados, mientras en el nivel nacional, en el que los protagonistas son los partidos, es determinante el número e importancia de los cargos de elección popular, al igual que los votos obtenidos. Así, por ejemplo, mientras para el clan Amin-Calle de Córdoba, de origen liberal, puede resultar de vital importancia ganar la alcaldía del municipio de Montelíbano, de categoría seis y con menos de 60 mil habitantes, dada la cantidad de recursos provenientes de regalías que controla; para el Partido Liberal, ganar dicha alcaldía, es un logro menor o irrelevante en comparación con un triunfo en una gobernación o en una alcaldía de la capital de un departamento”.

“En consecuencia, son los clanes y grupos políticos cuestionados los que activan los mecanismos de corrupción en las elecciones locales, muchos con el beneplácito o participación de los partidos políticos nacionales”.

“El otorgamiento de avales es el primer paso. Es aquí donde se definen las relaciones entre los niveles central, regional y local. La regla es así: los partidos políticos delegan en los líderes de los clanes con representación en el Congreso la responsabilidad de avalar candidaturas y establecer las coaliciones en sus respectivos departamentos. Estos postulan a los miembros prestantes del clan reconocidos por los partidos nacionales a gobernaciones y a las alcaldías de las capitales de departamento y les conceden a sus aliados candidaturas de menor visibilidad. Procesos que se encuentran en muchas ocasiones mediados por transacciones económicas, en especial, en contextos regionales en los que dos o más clanes compiten por el aval de un mismo partido. Pares encontró, nuevamente, que muchos de los candidatos de los clanes a las elecciones de 2019 cuentan con graves cuestionamientos por corrupción y vínculos con grupos al margen de la ley”.

“Durante la realización de las campañas, los clanes y grupos políticos cuestionados despliegan sofisticados mecanismos para asegurar sus votos: obvian los topes permitidos por la ley para la financiación de propaganda política y para los actos de campaña; entregan dádivas a los electores y hacen promesas de acceso a programas del Estado e, incluso (...) condicionan el acceso a estos programas”.

LEÓN VALENCIA,

Los clanes políticos que mandan en Colombia.
Editorial: Planeta, págs. 13-14, 2019

Código vilipendiado

Por más que lo intento, no he podido comprender la atroz andanada de muchos sectores, sin duda informados, contra el proyecto de reforma y unificación del Código Civil con el Código de Comercio, preparado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. La sola procedencia del texto debería congrega a todos los juristas del país, sin distinciones ideológicas, porque se trató de un esfuerzo de la más importante universidad pública de la nación, iniciado por el más connotado tratadista de la historia, el maestro Arturo Valencia Zea, nada más ni nada menos; pero no, para sorpresa de todos, le han llovido rayos y centellas no solo al articulado, sino también a la Universidad Nacional. Cómo se ve que también en los espíritus serenos de la academia y la jurisprudencia el siempre caldeado ambiente de la polarización nos sigue dividiendo.

Queda también en evidencia que no hay sector más reacio al cambio y a la novedad que el de los abogados. Así ha pasado, por ejemplo, con la implantación de la oralidad que trajo el Código General del Proceso, o con el más reciente Decreto 806 del 2020, este último declarado ajustado íntegramente a la Carta Política, en Sentencia C-420 del 2020, sin el cual no habría sido posible poner en funcionamiento la organización judicial durante este extenuante periodo de aislamiento obligatorio.

La pretensión de que haya un código cuya normativa satisfaga plenamente a alguien es ilusa. Ni siquiera lo logró el Código de Don Andrés Bello, que aún rige, que no se escapa a la crítica y no por eso a nadie se le ha ocurrido en casi dos siglos repudiar ese estatuto. Con el proyecto de Código Civil hay puntos controversiales, pero



RAMIRO
BEJARANO GUZMÁN
Profesor de Derecho Procesal
de las universidades de los Andes
y Externado de Colombia

“Hay que discutir serenamente este proyecto de Código Civil, sin duda bien intencionado y muy bien articulado, en vez de descalificarlo y condenarlo de plano al olvido”.

en general es un estatuto que no hay que estigmatizar, menos con el argumento de que se trata de un código izquierdista.

Los capítulos que tienen alborotados a los detractores de este borrador de código son los dos primeros, sobre “Objeto del Código” y la “Interpretación e integración del derecho”, es decir, apenas 7 artículos de los 2069 que trae el proyecto.

El capítulo I, sobre el objeto del código, principalmente define las fuentes formales del derecho privado, incluyendo la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los tratados y los convenios e instrumentos internacionales. No se ve estropeada esta referencia, a la que solamente le faltaría mencionar la costumbre, también como fuente

del derecho, tal y como ha venido siendo reconocida desde siempre.

El capítulo II no hace nada diferente a repetir todo de lo que hoy somos testigos silentes del acontecer judicial. En efecto, consagrar la obligación de que la ley debe interpretarse, aplicarse e integrarse de acuerdo con la Carta Política es lo que está ocurriendo desde la vigencia de la Carta de 1991, y ello no ha sido un disparate ni una herejía. No lo es tampoco que se consagre legalmente la prevalencia de las normas constitucionales frente a las demás leyes.

Tampoco veo motivo de espanto a que se adopte como criterio de interpretación de la ley o de cualquier norma jurídica “el fin que la hizo necesaria, el momento histórico en que deba aplicarse y los criterios gramatical, lógico, sistemático e histórico”, ni reconocer a la analogía su utilidad cuando se carezca de ley o norma jurídica.

Ninguna inquietud debe suscitar la indicación a los jueces de que resuelvan los asuntos “mediante decisión razonable” ni que se rehúsen a decidir “pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley”, ni que los jueces al decidir deban acatar el precedente judicial definido por altas cortes, sin perder el derecho de apartarse de la jurisprudencia. Esto no es un hallazgo, sino más de lo mismo.

Como antiguo profesor de Bienes no he advertido que se amenace la propiedad privada, como lo he oído a varios exaltados críticos. Claro, hay aspectos que merecen revisarse, por ejemplo, el relacionado con definir como baldíos los predios rurales “que no tienen matrícula inmobiliaria” que agudiza el gran conflicto que sigue sin resolverse luego de la sentencia de tutela 488 del 2014.

Hay que discutir serenamente este proyecto de Código Civil, sin duda bien intencionado y muy bien articulado, en vez de descalificarlo y condenarlo de plano al olvido.

LA COSA JURÍDICA

La JEP

